

Bogotá, abril 22 de 2024

Señor.
JUEZ CIVIL MUNICIPAL (Reparto)
BOGOTA D.C.
E. S. D.

REF.: ACCIÓN DE TUTELA.
ACCIONANTE: YAIR LEANDRO RODRIGUEZ GIRALDO

ACCIONADOS: BANCO GNB SURAMERIS, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

DIANA MARCELA IBARRA PARRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.267.899 expedida en Pasto y portadora de la T.P. 206728 DEL C.S. de la J., en atención al poder conferido por el señor **YAIR LEANDRO RODRIGUEZ GIRALDO**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.820.553 expedida en Bogotá (Cundinamarca); por medio del presente escrito, impetro ante usted **ACCIÓN DE TUTELA** en contra de: **BANCO GNB SURAMERIS y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, por la presunta vulneración a los derechos fundamentales de: mínimo vital, al debido proceso, a la vida digna y al de petición e información; lo anterior fundamentado en los siguientes:

I. HECHOS.

PRIMERO: Mi poderdante firmó declaración de asegurabilidad contenida en el formulario de la solicitud individual de seguro, requerida por el Banco GNB Sudameris para el trámite del crédito solicitado por compra de Cartera del Banco Popular, con fecha 15 de febrero de 2019, formato que no diligencio en presencia del asesor del Banco, sino que el mismo le fue enviado a la ciudad de Cali en la carrera 4 B No. 46 A 07, donde a esa fecha residía y no en Bucaramanga como se indica en el formulario que suscribió del cual sólo fue suscrito por él colocando su firma y huella y que el mismo fue enviado al asesor a través de correo a la ciudad de Bucaramanga.

SEGUNDO: Con fecha 30 de abril del año 2019, el Banco GNB Surameris realizó compra de cartera al Banco Popular por la suma de \$14.000.000, dinero que le fue consignado directamente en su cuenta de ahorros.

TERCERO: Desde el mes de mayo de 2019 y hasta la presente fecha ha venido realizando sus pagos por medio de libranza a dicho crédito por la suma de \$1.979.803, valor en que se encuentra incluido el seguro de riesgos de Muerte o Incapacidad Total y Permanente.

CUARTO: Con fecha 7 de noviembre del año 2019, a través de la Junta Médica de Sanidad del Ejército Nacional el accionante fue calificado con disminución de su capacidad laboral en con un 59.59%.

QUINTO: Como se indicó en el punto 2, al haber adquirido un seguro que incluye incapacidad temporal o permanente se realizó la reclamación del pago de del seguro de riesgo de muerte o incapacidad total o permanente de acuerdo a la calificación de la Junta Médica de Sanidad del Ejército Nacional, con fecha 22 de marzo de 2024.

SEXTO: El día 22 de marzo de 2024 a través del correo electrónico: respuesta_pqrs@gnbsudameris.com.co, se elevó derecho de petición con el fin de aclarar los descuentos realizados, valor del crédito, entre otra información para conocer el estado actual del crédito puesto que los valores descontados por nómina no corresponden a la información obtenida en una Sucursal del Banco, sin que a la presentación de la presente acción se haya recibido respuesta alguna a nuestros interrogantes, violando el derecho fundamental de petición e información.

SEPTIMO: El día 11 de abril de 2024, fue contestada la solicitud del pago de seguro de riesgo de muerte o incapacidad total o permanente, misma que fue resulta de manera negativa indicando que: “En este caso, es preciso señalar que el asegurado firmó la declaración de asegurabilidad contenida en el formulario de la solicitud individual de seguro, requerida por el Banco GNB Sudameris para el trámite del crédito solicitado, el 15 de febrero de 2019, y en ella manifestó no padecer ni haber padecido ninguna enfermedad”. Es de anotar que la entidad financiera hace una contestación sin analizar lo siguiente:

Como se indicó el formulario suscrito con fecha 15 de febrero de 2019 no fue firmado en las instalaciones en banco ni frente al asesor del crédito, dentro del formulario existen espacios en donde las preguntas son de si o no y en ningún momento corresponden al diagnóstico por el cual perdió su capacidad el hoy accionante. Dentro del formulario aparece una casilla en donde indica: “El cliente requiere remisión médica”, en donde se marco la palabra NO, y no entiende porque se atribuye esta responsabilidad a mi representado toda vez que al hablar de cliente es al banco a quien le corresponde determinar si de acuerdo a las respuestas dadas debe ser o no remitido a un examen médico que indique el real estado de salud del solicitante en tal sentido no se puede atribuir la carga de la prueba al cliente. Atendiendo a las condiciones generales del seguro de vida grupo deudores y a la firma de la declaración de asegurabilidad por parte del accionante, como la Aseguradora Solidaria de Colombia no realizó ningún tipo de examen médico al señor **YAIR LEANDRO RODRIGUEZ GIRALDO**, ni le exigió allegar uno, con el fin de determinar su estado de salud para dejar en claro las preexistencias y exclusiones del contrato, no puede ahora pretender evadir la cobertura del riesgo asegurado mediante la figura de la objeción, cuando tuvo una actuación negligente que impidió establecer las condiciones de salud de aquel. Por ende, indicó que debe proceder a generar la cobertura sin anteponer traba alguna.

Con base en los anteriores hechos, solicito

II. PRETENSIONES.

PRIMERA: La protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a la vida digna, derecho de petición e información y demás derechos que su señoría considere han sido vulneradas por la entidad financiera y la entidad aseguradora; y en consecuencia, se ordene al Banco GNB Surameris y Aseguradora Solidaria de Colombia, se haga efectiva la póliza de incapacidad total y permanente por invalidez con la cual estaba asegurado el crédito, con el fin de cubrir el valor insoluto de la deuda y de exonerarlo de esta obligación a partir del 7 de noviembre del año 2019 donde fue calificado por la Junta Médica del Ejército Nacional con pérdida de capacidad laboral del 59.59%.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

1. Procedencia de la acción de tutela contra particulares que ejercen actividades financieras y/o aseguradoras. Reiteración de jurisprudencia.

1.1. La Constitución Política en su artículo 86 inciso 5º y el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 42, señalan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares. No obstante, para su adecuado trámite, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que la procedencia de la misma se soporta en tres aspectos cuyo análisis se orienta: i) en función de los derechos fundamentales vulnerados, ii) frente a la oportunidad y a las características de la conducta desplegada por el particular que tenga la virtud de ponerlos en riesgo, y iii)

analizando la situación fáctica en que se encuentren víctima y agresor, o al tipo de vínculo que exista entre ellos¹

De igual manera, la condición del sujeto pasivo contra quien se interpone la acción de tutela determina la procedencia de este mecanismo excepcional. Por ello, el legislador consideró que el sujeto pasivo de la tutela debía cumplir con alguna de las siguientes condiciones especiales: (i) ser prestador de un servicio público, (ii) que su comportamiento afecte de forma directa y grave el interés colectivo, y que (iii) su conducta genere situaciones de indefensión o subordinación. En esos casos puntuales, la acción de tutela se habilita como instrumento para proteger los derechos fundamentales de las lesiones que provengan de particulares, sobre todo porque en muchas de las relaciones se sitúan ciertos individuos en condición de inferioridad²

Amparada en ese contexto, de forma pacífica la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la acción de tutela procede frente a particulares que ejercen actividades bancarias y aseguradoras. Como lo referenció la sentencia T-830 de 2014³, ello se explica por varias razones, a saber: “[p]rincipalmente, porque esta clase de entidades ejercen un papel determinante en la economía nacional, de tal forma que las sitúa en una posición privilegiada respecto de los ciudadanos o habitantes de nuestro país. Esos privilegios pueden traer consigo, directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, la subordinación y/o indefensión de los particulares frente a ellas. De allí que, incluso, las haya considerado prestadoras de un servicio público”.

En la sentencia **T-738 de 2011**⁴ se dijo que “las razones para hacer procedente la acción de tutela contra estas entidades ha tenido en cuenta, en general, que las actividades financieras –dentro de las que se encuentran la bancaria y aseguradora–, en tanto relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público, es una manifestación de servicio público o que al menos involucra una actividad de interés público⁵– de acuerdo con el artículo 355 Constitucional-”.

PRONUNCIAMIENTOS RECIENTES DE ESTA CORTE SOBRE CONFLICTOS POR EL NO PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS. Tensión existente entre la aplicación estricta de cláusulas contractuales y los derechos fundamentales de sujetos en condición de debilidad manifiesta o vulnerabilidad, cuando se alegan preexistencias o reticencias en el seguro. Reiteración de jurisprudencia.

¹ Sentencia T – 393 DE 2015

² MP Luis Ernesto Vargas Silva). Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-222 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).

³ MP Mauricio González Cuervo).

⁴ Esta cita viene incluida en la transcripción que se hace de la sentencia T-738 de 2011: Es importante señalar que en algunas oportunidades la jurisprudencia constitucional ha planteado una especie de asimilación entre la noción de servicio público y la de interés público. Así por ejemplo, en la sentencia T-847 de 2010 la Corte Constitucional señaló lo siguiente: “Concretamente, cuando el reclamo constitucional tiene que ver con la vulneración de los derechos al buen nombre y al hábeas data por parte de una entidad bancaria, derivado del reporte efectuado a las centrales de riesgo a partir de una obligación que la actora afirma inexistente, la acción de tutela se torna procedente porque la actividad financiera, cuyo objetivo principal es el de captar recursos económicos del público para administrarlos, intervenirlos y obtener de su manejo un provecho de igual naturaleza, ha sido considerada por la Corte Constitucional como servicio público (...). Lo anterior lo reglamenta el artículo 335 Superior cuando señala que las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos que se captan del conglomerado en general, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito.”

⁵ Sentencia T 393-2015

En los últimos años esta Corporación ha dictado varias sentencias resolviendo conflictos relacionados con el no pago de pólizas de seguros porque en criterio de las aseguradoras los tomadores no brindaron en la declaración de asegurabilidad la información correspondiente frente a su estado de salud, lo cual posteriormente conlleva a una pérdida de capacidad laboral que termina con la invalidez del asegurado; en esos casos, de forma constante las aseguradoras han aplicado la figura de la reticencia en el seguro derivada de preexistencias médicas del asegurado al tomar la póliza, por lo que disponen el no pago del seguro poniendo en riesgo los derechos fundamentales de las personas, en especial, su derecho al mínimo vital. La grave afectación a tales derechos ha justificado la intervención excepcional de la Corte⁶. La Corte fijó dos reglas importantes en materia de preexistencias y reticencia en los contratos de seguros, a saber: (i) que la carga de la prueba en materia de preexistencias radica en cabeza de la aseguradora y no del tomador del seguro; y, (ii) que las aseguradoras no podían alegar preexistencias si, teniendo las posibilidades para hacerlo, no solicitaban exámenes médicos a sus usuarios al momento de celebrar el contrato. Así, señaló lo siguiente:

“(...) la Sala de Revisión encuentra que Colseguros S. A. fue negligente al omitir realizar los respectivos exámenes médicos o exigir la entrega de unos recientes, para así determinar el estado de salud de la peticionaria. Por ese motivo, no es posible que ante la ocurrencia del riesgo asegurado, alegue que la enfermedad que lo ocasionó es anterior al ingreso de la señora Gloria Margoth Turriago Rojas a la póliza de vida grupo deudores”.

Aplicando tales reglas, la Sala Sexta de Revisión estimó vulnerado los derechos al debido proceso, al mínimo vital y a la vida digna de la peticionaria, toda vez que la objeción realizada por la compañía aseguradora no contaba con las pruebas suficientes para determinar la preexistencia y acentuaba la situación de debilidad manifiesta de la peticionaria que solo contaba con una pequeña pensión para su digna subsistencia. En consecuencia, dispuso que la aseguradora efectuara los trámites necesarios para pagar el saldo insoluto de la obligación crediticia de la actora, por cuanto no existían exámenes médicos previos que permitieran concluir objetivamente que la disfonía era anterior a la fecha en que fue tomada la póliza de seguros⁷.

En la sentencia **T-222 de 2014**, en cuanto a que las preexistencias no son sinónimo de reticencia pues el artículo 1058 del Código de Comercio castiga la mala fe del tomador del seguro. Por ende, indicó que las aseguradoras deben cumplir con determinadas cargas para eximirse de la responsabilidad de no cumplir con sus obligaciones aduciendo una preexistencia como causal de reticencia, a saber: “(i) probar que la enfermedad fue adquirida antes de la celebración del contrato, pero además, para ello, debió (ii) haber hecho un examen de ingreso que dé cuenta del estado de salud del asegurado. Igualmente, (iii) en caso de haber cumplido con esas cargas, deberá probar que entre la preexistencia y la conducta del tomador existió mala fe. No basta alegar preexistencia sin que se exija demostrar mala fe”⁸.

Visto el anterior panorama jurisprudencial, la Sala concluye que cuando existe un conflicto entre un sujeto de especial protección constitucional que carece de recursos económicos para subsistir y una aseguradora, relacionado con el no pago de una póliza de seguro porque en criterio de ésta, aquél incurrió en reticencia al no brindar la información real de su estado de salud al momento de diligenciar la

⁶ Sentencia T-832 de 2010

⁷ Sentencia T-830 de 2014, página 23, parte final.

⁸ Sentencia T 393 de 2015

declaración de asegurabilidad y posteriormente la enfermedad omitida conllevó la pérdida de capacidad laboral del asegurado por invalidez superior al 50%, se debe resolver aplicando las siguientes reglas: (i) los contratos de seguros se rigen por el principio de buena fe que obliga a ambos contratantes y que se materializa en el deber de redactar el clausulado de las pólizas de seguros eliminando todo tipo de ambigüedad contractual, lo cual impone incluir con precisión y de forma taxativa las preexistencias que generan exclusión de cobertura del riesgo asegurado; (ii) con el fin de determinar tales preexistencias, las aseguradoras tienen la carga de realizar exámenes médicos previos al tomador de la póliza para establecer de forma objetiva su condición de salud al momento de suscribir el seguro; (iii) en caso de no realizar el examen médico previo, las aseguradoras tienen la carga de demostrar que la preexistencia era conocida con certeza y con anterioridad por el tomador del seguro, y que al no haberla reportado en la declaración de asegurabilidad éste incurrió en una mala fe contractual, ya que solo de esa forma es posible sancionar la conducta silente con la reticencia que establece el artículo 1058 del Código de Comercio; y, en todo caso (iv) no será sancionada si el asegurador conocía, podía conocer o no demostró los hechos que dan lugar a la supuesta reticencia⁹.

2. El derecho fundamental de petición y el acceso a la información

El artículo 23 de la Constitución establece que “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”

En repetidas ocasiones, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que este derecho comporta las siguientes obligaciones correlativas para la autoridad que recibe la solicitud: (i) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (ii) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que debe ser lo más corto posible¹⁰; (iii) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado; (iv) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder¹¹; y (v) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado¹².

Además, esta Corporación ha estudiado el ejercicio y alcance del derecho fundamental de petición¹³ y ha concluido que éste constituye una herramienta

⁹ Sentencia T-481 de 1992; M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.

¹⁰ Sentencia T-219 de 2001, M.P. Fabo Morón Díaz.

¹¹ Sentencia T-249 de 2001; M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

¹² Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

¹³ En la Sentencia **T-596 de 2002**, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte Constitucional recalcó la importancia del derecho de petición, como mecanismo de participación ciudadana en el funcionamiento de las entidades públicas, en los siguientes términos: *“En materia del ejercicio del poder político y social por parte de las personas, la Constitución de 1991 representa la transferencia de extensas facultades a los individuos y grupos sociales. El derecho a la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de reunión, el derecho de información o el derecho de acceder a los documentos públicos, entre otros, permiten a los ciudadanos una mayor participación en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas. Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales por su parte han obrado una redistribución del poder político en favor de toda la población con lo que se consolida y hace realidad la democracia participativa.”*

determinante para la protección de otras prerrogativas constitucionales como son el derecho a la información, el acceso a documentos públicos, la libertad de expresión y el ejercicio de la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones que los afectan.¹⁴

En relación con el derecho de acceso a la información, en distintos pronunciamientos la Corte ha determinado que a través de una interpretación sistemática de la Constitución, es posible advertir que existe una relación de género y especie entre el derecho de petición y el de acceso a la información¹⁵.

En efecto, el derecho de petición envuelve la garantía de solicitar información por parte de los ciudadanos, acceder a la información sobre las actividades de la administración, y pedir y obtener copia de los documentos públicos.

El artículo 74 Superior consagra el derecho de acceso a la información en los siguientes términos: *“Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”*.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que el derecho de acceso a la información pública cumple tres funciones, a saber: primero, garantizar la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos; segundo, posibilitar el ejercicio de otros derechos constitucionales, al permitir conocer las condiciones necesarias para su realización; y tercero, garantizar la transparencia de la gestión pública, al constituirse en un mecanismo de control ciudadano de la actividad estatal.¹⁶

En consideración a la estrecha relación que tiene el ejercicio de este derecho con la realización de otras garantías fundamentales, las restricciones a tal prerrogativa están sometidas a condiciones rigurosas, las cuales fueron definidas en la **sentencia C-491 de 2007**¹⁷. Para dar solución al caso que se estudia, resultan relevantes las siguientes:

(i) Donde quiera que no exista reserva legal expresa, debe imperar el derecho fundamental de acceso a la información. Lo anterior implica que las normas que limitan el derecho de acceso a la información deben ser interpretadas de manera restrictiva y toda limitación debe estar adecuadamente motivada.

(ii) Los límites del derecho de acceso a la información pública tienen reserva de ley.

¹⁴ Sobre el particular, se pueden consultar las sentencias Sentencia T-074 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz y T-881 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

¹⁵ En la Sentencia **T-596 de 2002**, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte Constitucional recalcó la importancia del derecho de petición, como mecanismo de participación ciudadana en el funcionamiento de las entidades públicas, en los siguientes términos: *“En materia del ejercicio del poder político y social por parte de las personas, la Constitución de 1991 representa la transferencia de extensas facultades a los individuos y grupos sociales. El derecho a la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de reunión, el derecho de información o el derecho de acceder a los documentos públicos, entre otros, permiten a los ciudadanos una mayor participación en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas. Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales por su parte han obrado una redistribución del poder político en favor de toda la población con lo que se consolida y hace realidad la democracia participativa.”*

¹⁶ Sobre el particular, se pueden consultar las sentencias Sentencia T-074 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz y T-881 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

¹⁷ Sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(iii) La ley que restringe el derecho fundamental de acceso a la libertad de información debe ser precisa y clara al definir qué tipo de información puede ser objeto de reserva y qué autoridades pueden establecer tal limitación.

(iv) La reserva puede operar respecto del contenido de un documento público, pero no en relación con su existencia.

(v) La reserva legal sólo puede operar sobre la información que compromete derechos fundamentales o bienes constitucionales, pero no sobre todo el proceso público dentro del cual dicha información se inserta.

(vi) Cualquier decisión destinada a mantener en reserva determinada información debe ser motivada y la interpretación de la norma sobre reserva debe ser restrictiva.

(vii) La reserva legal no puede cobijar información que por decisión constitucional deba ser pública.

(viii) Los límites al derecho de acceso a la información, sólo serán constitucionalmente legítimos si se sujetan estrictamente a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

(ix) Existen recursos para impugnar la decisión de no revelar determinada información cuando se aduce que está sujeta a reserva legal.

De las anteriores condiciones es preciso concluir que cuando una autoridad administrativa se niegue a suministrar determinada información, deberá motivar su decisión en una reserva consagrada en la ley, la cual ha de ser interpretada de forma restrictiva y sólo podrá operar respecto de la información que comprometa derechos fundamentales

Por otra parte, el acceso a la información encuentra su limitación, entre otros, en los derechos a la intimidad y al *habeas data*. Para resolver las tensiones que se presentan entre estas garantías fundamentales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional¹⁸ y las Leyes Estatutarias 1266 de 2008¹⁹, y 1581 de 2012²⁰ han caracterizado distintos tipos de información.

Una primera tipología distingue entre la información personal y la impersonal. De conformidad con el literal c del artículo 3º de la Ley 1581 de 2012, el dato personal es “[c]ualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables;

Además, una segunda tipología, dirigida a clasificar la información desde un punto de vista cualitativo, en función de su publicidad y la posibilidad legal de acceder a la misma, clasifica la información en (i) pública o de dominio público, (ii) semiprivada, (iii) privada, y (iv) reservada o secreta.

La *información pública* es aquella que, según los mandatos de la ley o de la Constitución, puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si se trata de información general, privada o personal. Se trata por ejemplo de los

¹⁸ Sobre este tema se pueden consultar las sentencias T-729 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-1011 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño; y C-748 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

¹⁹ “Por la cual se dictan las disposiciones generales del *habeas data* y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.”

²⁰ Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

documentos públicos, las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas, los datos sobre el estado civil de las personas o sobre la conformación de la familia. Este tipo de información se puede solicitar por cualquier persona de manera directa y no existe el deber de satisfacer algún requisito para obtenerla.

La *información semiprivada*, refiere a los datos que versan sobre información personal o impersonal que no está comprendida en la regla general anterior, porque para su acceso y conocimiento presenta un grado mínimo de limitación, de tal forma que sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad administrativa en el cumplimiento de sus funciones o en el marco de los principios de la administración de datos personales. Es el caso de los datos relativos a las relaciones con las entidades de la seguridad social y al comportamiento financiero de las personas.

La *información privada*, es aquella que por versar sobre información personal y por encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Es el caso de los libros de los comerciantes, los documentos privados, las historias clínicas, y la información extraída a partir de la inspección del domicilio.

La *información reservada*, versa sobre información personal y guarda estrecha relación con los derechos fundamentales del titular a la dignidad, a la intimidad y a la libertad, motivo por el cual se encuentra reservada a su órbita exclusiva y "(...) no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Cabría mencionar aquí la información genética, y los llamados "datos sensibles" o relacionados con la ideología, la inclinación sexual, los hábitos de la persona, etc."²¹

La anterior tipología permite delimitar la información que se puede publicar en desarrollo del derecho fundamental a la información y aquella que, por mandato constitucional, no puede ser revelada, porque de hacerlo se transgredirían los derechos a la intimidad y al *habeas data*.

En la **sentencia T-161 de 2011**²², la Corte estableció que respecto de documentos públicos que contengan información personal privada y semiprivada, el derecho al acceso a documentos se ejerce de manera indirecta, por conducto de las autoridades administrativas o judiciales y dentro de los procedimientos respectivos, y sólo los documentos públicos que contengan información personal pública pueden ser objeto de libre acceso.

IV. PRUEBAS.

Solicito se tenga como medio de prueba:

1. Solicitud individual para seguro de vida grupo deudores

²¹ Sentencia T-729 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

²² M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En aquella oportunidad la Corte conoció el caso de un ciudadano que en ejercicio de su derecho fundamental de petición, planteó algunas preguntas al Director de un establecimiento penitenciario de mediana seguridad, con el fin de que le informara los motivos por los cuales en uno de los patios se había clausurado una biblioteca. La entidad demanda respondió que no se referiría a las peticiones consignadas en el escrito, pues se trataba de asuntos relacionados con la seguridad nacional. En aquella oportunidad, la Sala Octava de Decisión determinó que la decisión del Establecimiento Carcelario de negar el acceso a la información relacionada con la construcción de un comedor donde por años había funcionado un biblioteca en el patio cuarto, bajo el argumento de que se trataba de información sujeta a reserva, vulneraba los derechos de petición y acceso a la información pública del accionante.

2. Derecho de petición elevado ante Aseguradora Solidaria de fecha 22 de marzo de 2024, con respectivo soporte de envío
3. Historia Clínica del señor Yair Leandro Rodríguez Giraldo en donde consta la pérdida de capacidad laboral de fecha 7 de noviembre del año 2019.
4. Derecho de petición elevado ante Banco GNB Surameris de fecha 2024, con respectivo soporte de envío
5. Respuesta Aseguradora Solidaria de fecha 11 de abril de 2024
- 6.

V. ANEXOS.

1. Los documentos relacionados en el acápite de pruebas
2. Poder a mí conferido

VI. JURAMENTO.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que anteriormente no he impetrado acción de tutela contra los entes accionados con los mismos hechos ni pretensiones.

VII. NOTIFICACIONES.

Recibiré las notificaciones que el presente derecho pueda generar en la siguiente dirección:

La suscrita en la Calle 18 No. 23 - 39 Oficina 201 en San Juan de Pasto, correo electrónico: dianamarcelaibarra1@hotmail.com. Celular de contacto: 3163800428 y 3226403958

Mi poderdante señor Yair Leandro Rodríguez Giraldo, en la Carrera 79 D No. 35 – 90 Sur, urbanización Francisco José de Caldas, Barrio Kennedy, Bogotá, celular de contacto 3117009297, 3188342427, correo electrónico yairleandro11@gmail.com.

ACCIONADOS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Correo Electrónico: gnbsiniestroslibranzas@aon.com

BX 601 3433900 Ext. 21031/21032/21033

Celular: 3134615416 - APV

BANCO SUDAMERIS

Correo electrónico: respuesta_pqrs@gnbsudameris.com.co

Del Señor Juez,



DIANA MARCELA IBARRA PARRA
C.C.No. 1085267899 DE PASTO
T.P.No. 206728 DEL C. S. DE LA J.
Abogada